
Lejos del objetivo: la dirección de la guerra y las bajas civiles en Irak

I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

Principales hallazgos

El Presidente de Estados Unidos George W. Bush dijo que la guerra en Irak ha sido “una de las campañas militares más rápidas y humanitarias de la historia”.¹ Sin embargo, miles de civiles iraquíes resultaron muertos o heridos durante las tres semanas de combates que se iniciaron con los primeros ataques aéreos del 20 de marzo y finalizaron el 9 de abril de 2003, cuando Bagdad cayó en manos de las fuerzas de la Coalición liderada por Estados Unidos.

Human Rights Watch envió una misión a Irak entre finales de abril y principios de junio de 2003 con dos objetivos: (1) identificar e investigar posibles violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) por las partes en conflicto y (2) identificar patrones de combate adoptados por las partes que pudieran haber causado bajas y sufrimiento entre los civiles, que podrían haberse evitado tomando precauciones adicionales.

Human Rights Watch no emprendió esta misión para determinar el número de bajas civiles. Nuestra intención era más bien intentar entender cómo y por qué habían resultado muertos y heridos los civiles, con el fin de evaluar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y con vistas a reducir el impacto de la guerra sobre la población civil en el futuro.

La investigación demostró que las fuerzas iraquíes cometieron una serie de violaciones del derecho internacional humanitario, que podrían haber provocado importantes bajas civiles. Estas violaciones incluyen el uso de escudos humanos, el abuso de los emblemas de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, el empleo de minas antipersonal, la ubicación de objetos militares en lugares protegidos (tales como mezquitas, hospitales y patrimonio cultural), y no haber adoptado las precauciones adecuadas para proteger a la población civil de los peligros de las operaciones militares. La práctica militar iraquí de llevar ropas civiles complicó la distinción entre combatientes y civiles, poniendo a estos últimos en peligro, aunque no eliminó la obligación de las fuerzas de la Coalición de realizar esta distinción en todo momento y fijarse como objetivo solamente a los combatientes.

¹ Presidente George W. Bush, Discurso del Presidente de la Nación, 7 de septiembre de 2003, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030907-1.es.html> (consultado el 1 de diciembre de 2003).

Las tropas de la Coalición lideradas por Estados Unidos adoptaron precauciones para salvar vidas civiles y, en la mayoría de los casos, se esforzaron por respetar sus obligaciones legales. Human Rights Watch identificó, no obstante, ciertas prácticas que provocaron bajas civiles en la guerra aérea y terrestre, y durante el período de posguerra.

El uso generalizado de municiones de racimo, especialmente por parte de las tropas terrestres de Estados Unidos y el Reino Unido, provocó al menos centenares de bajas civiles. Las municiones de racimo, armas de gran tamaño que contienen docenas o cientos de submuniciones, suponen un peligro para la población civil por su amplia dispersión, o “huella”, y el gran número de submuniciones que no explotan en el momento del impacto. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó del uso de 10.782 municiones de racimo,² que podrían contener al menos 1,8 millones de submuniciones. Las tropas británicas utilizaron además 70 municiones de racimo lanzadas desde el aire y 2.100 lanzadas desde tierra, con un total de 113.190 submuniciones en su interior. Aunque los ataques con este tipo de armamento son especialmente peligrosos en las áreas pobladas, las fuerzas de tierra de Estados Unidos y Reino Unido utilizaron reiteradamente estas armas en ataques contra posiciones iraquíes dentro de barrios residenciales. Las fuerzas aéreas de la Coalición también provocaron bajas civiles por el uso de municiones de racimo, aunque en mucha menor medida.

Muchas de las bajas civiles de la guerra aérea se produjeron durante los ataques estadounidenses contra los líderes iraquíes. Estados Unidos utilizó una metodología defectuosa para fijar los objetivos mediante las intercepciones de conversaciones a través de teléfonos vía satélite que fueron corroboradas con información inadecuada de inteligencia. Los teléfonos vía satélite Thuraya facilitan coordenadas geográficas con un radio de 100 metros, por lo tanto, Estados Unidos no pudo determinar la ubicación del interlocutor con un grado de precisión por debajo de un área de 31.400 metros cuadrados. Esta estrategia defectuosa de fijación de objetivos se vio agravada por la falta de valoración efectiva tanto de los posibles riesgos para la población civil antes de los ataques como de su éxito y utilidad después de los ataques. Los 50 ataques reconocidos contra líderes iraquíes no lograron su objetivo. Aunque no acabaron con la vida de ninguna de las personas contra las que iban dirigidos, estos ataques mataron e hirieron a docenas de civiles. Entre los iraquíes que hablaron con Human Rights Watch sobre los ataques investigados se repitió la creencia de que los objetivos previstos no estaban presentes cuando se produjeron los ataques.

Los ataques aéreos de la coalición sobre objetivos previamente fijados provocaron pocas bajas civiles, y las fuerzas aéreas estadounidenses y británicas evitaron generalmente los daños a la infraestructura civil. Sin embargo, las fuerzas de la Coalición identificaron ciertos objetivos como de “uso dual”, incluidas las instalaciones eléctricas y de los medios de comunicación. Las investigaciones de Human Rights Watch desvelaron que los ataques aéreos contra instalaciones de distribución eléctrica en Nasiriya provocaron graves penurias a la población civil y que la legalidad de los ataques contra instalaciones de los medios de comunicación fue cuestionable.

² U.S. CENTCOM, resumen de informe sobre municiones de racimo, 2003, facilitado a Human Rights Watch por Paul Wiseman, *USA Today*.

La mayoría de las bajas civiles atribuibles a la conducta de la Coalición en la guerra terrestre parecen haber sido provocadas por municiones de racimo lanzadas desde tierra. En algunos casos de combates directos, especialmente en Bagdad y en Nasiriya, los problemas con la formación y divulgación sobre las reglas de combate para las tropas de Estados Unidos, así como la falta de claridad de las mismas, pudo haber contribuido a la pérdida de vidas civiles.

Los restos materiales explosivos de guerra (RMEG) provocaron cientos de bajas civiles durante y después de las hostilidades, y continúan siendo un peligro hoy en día. La Coalición fue dejando a su paso decenas de miles de fragmentos de municiones de racimo, es decir submuniciones que no explotaron en el momento del impacto y que en la práctica se convirtieron en minas terrestres. Si la tasa media de fallo fue del 5 por ciento, de acuerdo con el número de municiones de racimo utilizadas por las fuerzas de la Coalición, quedarían unos 90.000 fragmentos sin explotar. El daño humanitario y militar que han causado ha hecho que incluso algunos de los soldados que combatieron en Irak reclamen una alternativa a un arma que produce tantos fragmentos sin explotar. Mientras tanto, las fuerzas iraquíes abandonaron cantidades asombrosas de armas y municiones que han herido o matado a civiles en busca de cosas para jugar o chatarra para vender o reutilizar.

Los líderes civiles y militares de Estados Unidos y Reino Unido han subrayado reiteradamente su compromiso de evitar bajas civiles y otros daños a la población civil. Ninguno de los dos países, sin embargo, ha investigado y analizado adecuadamente porqué se producen bajas civiles. Esta tarea, que ha quedado sobre todo en manos de organizaciones como Human Rights Watch, debe ser una responsabilidad de las partes en conflicto. Estados Unidos y Reino Unido, que tienen capacidad para realizar este tipo de estudio, deberían hacer un recuento preciso de las bajas civiles que hayan causado durante el conflicto armado con el fin de ofrecer la máxima protección a la población civil en futuras guerras.

Derecho internacional humanitario

Durante la guerra de Irak, las fuerzas iraquíes y de la Coalición tenían obligación de respetar el derecho internacional humanitario (DIH), también conocido como el derecho del conflicto armado. El DIH exige a las partes en un conflicto armado que respeten y protejan a los civiles y otras personas que no tomen parte o ya no participen directamente en las hostilidades. También limita los medios y los métodos permisibles para la guerra. En este sentido, son especialmente relevantes los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Irak, Estados Unidos y Reino Unido.³ También es aplicable el

³ Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de agosto de 1949 (Primer Convenio de Ginebra), 75 U.N.T.S. 31, en vigor desde el 21 de octubre de 1950; Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar del 12 de agosto de 1949 (Segundo Convenio de Ginebra), 75 U.N.T.S. 85, en vigor desde el 21 de octubre de 1950; Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra del 12 de agosto de 1949 (Tercer Convenio de Ginebra), 75 U.N.T.S. 135, en vigor desde el 21 de octubre de 1950; Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949 (Cuarto Convenio de Ginebra), 75 U.N.T.S. 287, en vigor desde el 21 de agosto de 1950.

Reglamento de La Haya de 1907, ratificado por Estados Unidos y Reino Unido y ampliamente aceptado como representativo del derecho internacional consuetudinario.⁴

Ni Irak ni Estados Unidos han ratificado el Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo I), aunque Reino Unido es parte del tratado.⁵ El Protocolo I codificó y en cierta medida amplió las leyes vigentes, especialmente las relacionadas con la conducta durante las hostilidades. Hoy en día, muchas, si no la mayoría, de sus disposiciones se consideran un reflejo del derecho internacional consuetudinario.⁶

El principio de distinción es la piedra angular del derecho que regula la conducta durante las hostilidades. Exige a las partes en conflicto que distingan en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirijan sus operaciones únicamente contra objetivos militares.⁷

Los objetivos militares son los miembros de las fuerzas armadas, otras personas que estén tomando directamente parte en las hostilidades durante el período de su participación y “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”.⁸

Además de los ataques directos contra la población civil, el DIH prohíbe los ataques indiscriminados. Se trata de ataques que “pueden alcanzar indistintamente a objetivos

⁴ Convención (IV) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre con su anexo: Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Reglamento de La Haya), 3 Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 461, 187 Consol. T.S. 227, en vigor desde el 26 de enero de 1910.

⁵ Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) del 8 de junio de 1977, 1125 U.N.T.S. 3, en vigor desde el 7 de diciembre de 1978.

⁶ Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos consideran “evidencia del derecho consuetudinario de la guerra derivado del consentimiento general de los estados” la que “puede hallarse en los fallos judiciales, los escritos de juristas, la correspondencia diplomática y otros materiales documentales relativos a la práctica de los estados”. Manual de Campaña del Ejército de Estados Unidos, FM 27-10, La Ley y la Guerra Terrestre, 18 de julio de 1956, artículo 6. En 1987, el entonces Asesor Legal Adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Matheson, enumeró públicamente muchos de los principios consagrados en el Protocolo I que Estados Unidos considera parte del derecho internacional consuetudinario. Entre ellos: limitación de los métodos y medios de hacer la guerra, especialmente los que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios (art. 35); protección de la población civil y de los ciudadanos individuales, contra los actos o las amenazas de violencia y los ataques que provoquen bajas civiles excesivas en relación con la ventaja militar prevista (art. 51); protección de los civiles contra su uso como escudos humanos (arts. 51 y 52); prohibición de hacer padecer hambre a los civiles como método de hacer la guerra y permitir la entrega de ayuda humanitaria imparcial a la población civil (arts. 54 y 70); tener en cuenta consideraciones militares y humanitarias al realizar operaciones militares con el fin de minimizar las muertes, lesiones y daños incidentales contra la población civil o los bienes de carácter civil, y dar aviso con la debida antelación a los civiles a no ser que las circunstancias no lo permitan (arts. 57-60). Michael J. Matheson, Comentarios sobre la posición de Estados Unidos con respecto a los Protocolos de 1977 Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, reimpreso en “The Sixth Annual American Red-Cross Washington College of Law Conference on International Humanitarian Law: A Workshop on Customary International Law and the 1977 Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions,” *American University Journal of International Law and Policy*, vol. 2, no. 2, Otoño de 1987, pp. 419-27.

⁷ Protocolo I, art. 48.

⁸ *Ibid.*, arts. 51(3), 52.

militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil”.⁹ Entre estos ataques se encuentran “los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto” o los que emplean métodos o medios de combate “que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto”.¹⁰

También son indiscriminados los ataques que violen el principio de proporcionalidad “cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil... que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista” con dicho ataque.¹¹

En el transcurso de las operaciones militares se deben tomar constantes precauciones para preservar a la población civil y a los bienes de carácter civil de los efectos de las hostilidades. Se requiere por lo tanto a las partes en conflicto que adopten medidas cautelares con vistas a evitar, o en todo caso minimizar, las pérdidas incidentales de vidas civiles, las lesiones de civiles o los daños contra bienes de carácter civil. Estas precauciones incluyen:

- Hacer “todo lo que sea factible para verificar” que los objetivos que se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata de objetivos militares.
- Tomar “todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos” de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible “el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil”.
- Abstenerse de decidir un ataque cuando “sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil... que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.
- Salvo que las circunstancias lo impidan, “dar aviso con la debida antelación... de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil”.
- “Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para obtener una ventaja militar equivalente”, se optará por el objetivo cuyo ataque, según sea de prever, “presente menos peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil”.
- Evitar “situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas”.
- Esforzarse “por alejar de la proximidad de objetivos militares a la población civil”.¹²

Las partes en conflicto también tienen prohibido utilizar a la población civil “para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares” o utilizar su presencia “para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares”.¹³

⁹ *Ibíd.*, art. 51(4).

¹⁰ *Ibíd.*, art. 51(4)(a, b).

¹¹ *Ibíd.*, art. 51(5)(b).

¹² Protocolo I, arts. 57, 58.

¹³ *Ibíd.*, art. 51(7).

Los establecimientos sanitarios y el patrimonio cultural gozan de protección especial conforme al derecho internacional humanitario. Los hospitales y otras unidades sanitarias “serán respetadas y protegidas” y no serán objeto de ataque. No serán utilizadas “para tratar de poner objetivos militares a cubierto de los ataques”.¹⁴ Dicha protección cesará, sin embargo, “cuando se haga uso de ellas con objeto de realizar actos perjudiciales para el enemigo”.¹⁵

Las partes en conflicto también tienen prohibido “cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos. . . o utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar.”¹⁶

Metodología

Human Rights Watch ha realizado varias misiones de valoración de daños ocasionados por el combate en el pasado para investigar la conducta durante la guerra y las bajas civiles, lo que incluye visitas a Yugoslavia en 1999 y Afganistán en 2002. Mientras que las fuerzas armadas realizan estas valoraciones para determinar el éxito militar de una operación, Human Rights Watch examina los mismos incidentes desde la perspectiva del DIH. En el caso de esta misión a Irak, la investigación de Human Rights Watch se dividió en tres fases: fase previa, fase de misión y fase posterior.

Fase previa

Durante la fase activa de las hostilidades, Human Rights Watch hizo seguimiento de las informaciones de prensa de todo el mundo sobre civiles heridos o muertos a causa de los combates. Examinó cada una de las informaciones para saber la ubicación, la fecha y la hora del incidente, así como las tácticas y el armamento utilizados, y las tropas involucradas. Estas informaciones se recopilaron diariamente en una base de datos electrónica que ayudó a los investigadores de Human Rights Watch a determinar los lugares que se inspeccionarían y estudiarían inicialmente en Irak. El trabajo previo también incluyó la creación de mapas de Irak y sus principales ciudades mediante software de información geográfica ArcView. Estos mapas digitalizados se emplearían para mostrar los datos recopilados dentro de Irak sobre la ubicación precisa de varios objetos y eventos.

Fase de misión

Human Rights Watch envió a un equipo de tres investigadores a Irak, entre el 29 de abril y el 1 de junio de 2003, para investigar los efectos de la guerra aérea, la guerra terrestre y el ambiente para los civiles inmediatamente posterior a los combates. El equipo contó con un experimentado analista militar y experto en Irak, una abogada con experiencia en

¹⁴ *Ibid.*, art. 12.

¹⁵ *Ibid.*, art. 13.

¹⁶ *Ibid.*, art. 53. Véase también la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que ha sido ratificada por Irak.

derecho internacional humanitario y el uso de municiones de racimo y un investigador principal. Los tres tenían experiencia previa en este tipo de investigaciones.¹⁷ El equipo se concentró en las principales zonas de combate de los valles del Tigris y del Eufrates en las que se había informado de muertes de civiles. Guiados inicialmente por la base de datos de informaciones de prensa y posteriormente por la información que recibieron de fuentes dentro del país, el equipo visitó diez ciudades: Umm Qasr, Fao, Basra, Nasiriya, Shatra, Bagdad, Hilla, Karbala, Najaf y Falluja. Obtuvo datos sobre la ubicación de los impactos de la munición de racimo del Centro de Operaciones Humanitarias en Kuwait, los marcó en ArcView y visitó muchos de los lugares ubicados en áreas pobladas. El equipo se desplazó libremente dentro de las ciudades y entre ellas con un vehículo privado, si armas y sin escolta militar.

En cada uno de los lugares visitados, el equipo intentó investigar tres fuentes de información: balística, fuerzas beligerantes y las víctimas.

- *Balística*: Las pruebas de balística incluyeron daños por explosión o fragmentación y, especialmente en el caso de las municiones de racimo, piezas de armamento. Esta información ayudó al equipo a determinar las armas usadas en un incidente particular y la manera en que habían sido empleadas.
- *Fuerzas beligerantes*: El equipo intentó entrevistar a soldados de todas las partes involucradas que pudieran facilitar información sobre cómo habían combatido en enfrentamientos particulares, lo que incluía detalles sobre las armas y las tácticas empleadas, la conducta que observaron en el enemigo y la presencia de civiles en el momento del ataque.
- *Víctimas*: El equipo intentó entrevistar a víctimas y testigos de los ataques que habían causado daños a la población civil con el fin de reunir información sobre la hora, la fecha, la ubicación y la naturaleza de los incidentes. También revisaron miles de historiales médicos en más de una docena de hospitales de las ciudades que visitaron y entrevistaron al personal sanitario de dichos centros.

Además, en cada uno de los lugares, el equipo registró las coordenadas de ubicaciones importantes mediante unidades manuales Garmin del preciso sistema de posicionamiento global (global positioning system, GPS). Entre las localizaciones registradas se encuentran campos de escombros, cráteres de bombas, metralla y daños por pequeñas armas, la ubicación de las fuerzas iraquíes y de la coalición según el testimonio de los testigos, lugares en los que murieron o fueron heridos civiles. El equipo también tomó miles de fotografías digitales para analizarlas junto con las pruebas antes descritas.

¹⁷ Antes de trabajar con Human Rights Watch, Marc Garlasco, analista militar, estuvo destacado en Irak como agente de inteligencia de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos. Realizó una valoración de daños ocasionados por el combate en Kosovo para el Pentágono. Todas las conclusiones de este informe están basadas en el trabajo que realizó después de unirse a Human Rights Watch. Bonnie Docherty, abogada e investigadora, y Reuben E. Brigety II, ex investigador, realizaron una valoración de daños ocasionados por el combate en Afganistán para Human Rights Watch.

Cabe destacar que, con una sola excepción, Human Rights Watch no pudo entrevistar a miembros de las fuerzas armadas iraquíes para obtener su respuesta frente a las acusaciones de violaciones del DIH y sus opiniones sobre la manera en que combatieron las fuerzas de la Coalición. En este informe no se valora la ventaja militar obtenida con ninguno de los ataques que analiza. Las partes en un conflicto armado tienen que llevar a cabo dicha valoración caso por caso antes de cada ataque.

Fase posterior

Después de regresar de Irak, el equipo recopiló y analizó toda la información que había reunido durante la misión. También realizó entrevistas de seguimiento con los funcionarios relevantes de Estados Unidos y Reino Unido.

Bajas civiles

Human Rights Watch no intentó cuantificar las muertes de civiles en Irak. Aunque sería útil contar con una cifra general para entender plenamente el impacto de la guerra y realizar análisis comparativos con otros conflictos recientes, creemos que es más importante entender las circunstancias que provocaron las bajas civiles.

Los investigadores de Human Rights Watch fueron a muchos hospitales en las diez ciudades y los numerosos pueblos que visitaron durante la misión. Los directores y el personal sanitario de los hospitales que habían trabajado en estos centros durante el conflicto les facilitaron los expedientes médicos iraquíes.¹⁸ Estos datos permitieron sacar algunas conclusiones estadísticas a los investigadores, pero también subrayaron lo difícil que es hacer un recuento preciso de las bajas civiles.

La calidad de los registros hospitalarios variaba entre formularios informáticos detallados y libretas manchadas de sangre con notas a mano. Aunque algunos centros médicos pudieron mantener registros generales, los expedientes de otros hospitales eran incompletos y se habían perdido algunas secciones. Es comprensible que durante las operaciones militares el mantenimiento de los registros no siempre fuera la principal prioridad. Otra dificultad para cuantificar las bajas civiles en Irak es que los muertos se entierran casi inmediatamente, de acuerdo con el rito musulmán. Aunque los hospitales han registrado algunas de las muertes durante la guerra, una parte de las víctimas no fueron trasladadas a los hospitales por motivos religiosos, ni siquiera para obtener los certificados de defunción. Finalmente, al igual que en cualquier guerra, hubo muy pocos o ningún resto con los que identificar a los muertos.

Aunque puede ser imposible hacer un recuento completo de las bajas civiles, se han hecho algunos intentos para cuantificar a los muertos. Associated Press sondeó 60 de los 124 hospitales iraquíes inmediatamente después del cese de las principales operaciones de combate y calculó que habían muerto al menos 3.420 civiles. La agencia de prensa dijo que el recuento era “fragmentario” y señaló que “el recuento total—si alguna vez se

¹⁸ Véanse los apéndices sobre las bajas civiles en Hilla, Najaf y Nasiriya.

llega a hacer—será seguramente significativamente superior”.¹⁹ *Los Angeles Times* realizó un estudio de 27 hospitales en Bagdad y sus alrededores y descubrió que habían muerto al menos 1.700 civiles y más de 8.000 habían resultado heridos en la capital.²⁰

Las estadísticas derivadas de los registros hospitalarios indican que la guerra terrestre provocó la gran mayoría de las muertes. Más de 400 civiles murieron en Nasiriya, entre ellos al menos 72 mujeres y 169 niños; otras 700 mujeres y niños resultaron heridos. La preponderancia de estas bajas se debió al fuego de pequeñas armas cuando la batalla se extendió con furia a un barrio densamente poblado de la ciudad. Las bajas provocadas por el fuego terrestre fueron similarmente altas en Bagdad. En Hilla, las municiones de racimo lanzadas desde tierra por las tropas de Estados Unidos provocaron el 90 por ciento de las bajas civiles. Estas armas también mataron grandes cantidades de civiles en Basra y Bagdad. Aunque la guerra terrestre causó un número significativamente mayor de víctimas, la guerra aérea, especialmente los ataques fallidos dirigidos contra los líderes iraquíes, contribuyeron a la cifra total de muertes y heridos entre la población civil.



Ali Kadhim Hashim frente a los escombros donde el ataque de un helicóptero de la Marina de Estados Unidos mató a sus familiares en Nasiriya. El 23 de marzo de 2003 murieron 14 miembros de su familia cuando se encontraban en casa, entre ellos sus padres, su mujer y sus hijos. © 2003 Reuben E. Brigety, II / Human Rights Watch

¹⁹ Niko Price “3,240 Civilian Deaths in Iraq”, Associated Press, 10 de junio de 2003.

²⁰ Laura King, “Baghdad’s Death Toll Assessed”, *Los Angeles Times*, 18 de mayo de 2003.

Principales recomendaciones

Human Rights Watch hace las siguientes recomendaciones a Estados Unidos, Reino Unido y otros miembros de las fuerzas de la Coalición:

- No deben llevarse a cabo ataques aéreos contra líderes, como los lanzados en Irak, hasta que no se hayan corregido los fallos de inteligencia y en la fijación del objetivo. No deben realizarse ataques contra líderes sin una estimación adecuada de los daños colaterales. Los ataques no deben basarse exclusivamente en las interceptaciones de conversaciones telefónicas vía satélite, y no deben realizarse ataques en áreas densamente pobladas a no ser que la información de inteligencia se considere altamente fiable.
- Se debe realizar una investigación exhaustiva de los procesos de valoración de los daños colaterales y de los daños causados por el combate para determinar cómo pueden mejorarse para reducir las bajas civiles y aplicar los cambios apropiados.
- No deben utilizarse municiones de racimo lanzadas desde el aire o la tierra hasta que no se hayan resuelto los problemas humanitarios asociadas con este tipo de armas. En particular, se debe suspender su uso hasta que se reduzca drásticamente la tasa de fragmentos sin explotar. Si se emplean estas municiones, nunca debe hacerse dentro o cerca de áreas pobladas. No deben utilizarse en ninguna circunstancias los arsenales más antiguos de bombas de racimo muy poco fiables y no dirigidas.
- Se deben utilizar municiones guiadas de precisión siempre que sea posible, especialmente contra objetivos dentro de áreas pobladas.
- Se deben extremar las precauciones en los ataques contra instalaciones de energía eléctrica. Nunca deben atacarse las centrales eléctricas en particular. Si se atacan instalaciones de suministro eléctrico, debe hacerse de manera que sólo provoque una interrupción temporal del servicio.
- Las instalaciones de los medios de comunicación no deben ser atacadas a no ser que esté claro que contribuyen efectivamente a la acción militar y su destrucción ofrece una ventaja militar definida.
- Las fuerzas armadas deben mejorar la formación sobre la aplicación de las reglas de combate, especialmente en los combates urbanos y en circunstancias en que los soldados enemigos puedan llevar ropa civil. Las fuerzas armadas de Estados Unidos deben asegurarse de que no existe confusión entre las reglas de combate escritas y las verbales y que éstas se distribuyen de manera oportuna.
- Es necesario dedicar más planificación, personal y recursos a la cuestión de los restos materiales sin explotar y los alijos de armas y municiones tanto durante el conflicto como inmediatamente después de éste.